

República de Colombia
Rama Judicial del Poder Público



Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C.
Sala Civil de Decisión

Magistrada Sustanciadora
SANDRA CECILIA RODRÍGUEZ ESLAVA

CLASE DE PROCESO	Verbal
DEMANDANTES	Adriana Betancur Ochoa y otros
DEMANDADOS	Cooperativa de Transportes Velotax Ltda. Y otros
RADICADO	110013103 017 2017 00303 01
PROVIDENCIA	Interlocutorio 10
DECISIÓN	Aclaración de sentencia de segunda instancia
FECHA	Dieciocho (18) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Procede la Sala a resolver la solicitud presentada por la parte demandante, con miras a que se adicione, aclare y corrija la sentencia proferida por esta Corporación el 13 de diciembre de 2022.

I. ANTECEDENTES

1. Por medio de la providencia referida fue modificado el fallo de 29 de septiembre de 2021, emitido por el Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá. En ella se excluyó al demandante Gabriel Jaime Mejía Piedrahita de la declaración expresada y se reconoció los daños morales derivados tanto de la muerte del señor Félix Horacio Betancur Mesa (q.e.p.d.), como de las secuelas físicas y mentales de la señora Belisa Ochoa Moreno, en favor de Adriana y Oscar Betancur Ochoa, en su condición de hijos, e Isabella y Gabriel Felipe Mejía Betancur; María Alejandra y Laura Andrea Betancur Sanjuán, como sus nietos.

Así mismo, se dispuso que la empresa Equidad Seguros Generales Organismo Cooperativo, sufrague en favor de los accionantes la suma de \$42'187.068.00, por la póliza de responsabilidad civil extracontractual No



AA002341, más los intereses moratorios generados desde el 13 de octubre de 2018 y hasta el momento de su pago, al amparo del artículo 1080 del Código de Comercio.

En todo lo demás se confirmó la providencia recurrida.

2. Tras su notificación el 19 de diciembre siguiente, los convocantes solicitaron su complementación, advirtiendo la omisión en el fallo de segundo grado consistente en haber dejado de reconocer, sin explicación alguna, el daño emergente sufrido por el señor Oscar David Betancur Ochoa, que en la primera instancia se estimó en \$2'617.400.00, la cual fue adicionada por el juzgado de conocimiento, ordenando su indexación desde la fecha de presentación de la demanda y hasta cuando se realice su pago. Deprecaron asimismo, que dicha suma fuera actualizada por este Tribunal en sentencia complementaria, así como que se disponga sea actualizada para la fecha del pago, invocando al efecto los preceptos contenidos en los artículos 283 y 284 del Código General del Proceso.

De otra parte, aseguran los actores que la condena impartida a la aseguradora Equidad Seguros Generales Organismo Cooperativo, fue en abstracto, en la medida que no se especificó en ella la cuantía de los intereses moratorios que la misma debe pagar, por lo que solicitan se determine dicho rubro, con sustento en lo normado en la primera de las normas citadas en el párrafo que precede.

Por último, impetraron los actores la aclaración y corrección respecto de la distinción de los perjuicios morales irrogados a cada víctima por los daños corporales causados a las víctimas directas, los señores Félix Horacio Betancur Mesa y Belisa Ochoa Moreno, toda vez que las cargas impositivas se ordenaron de forma unificada, situación que les impide conocer cuáles perjuicios morales les fueron reconocidos por cada daño sufrido por dichas personas y cuáles no, aduciendo que dicha fórmula unificada contiene conceptos o frases que ofrecen verdadero motivo de duda, a la luz de lo normado en el artículo 285 del Código General del Proceso. Asimismo pregonaron que los daños morales se tasaron en salarios mínimos legales, cuyo equivalente fue indicado para su



notificación, mas no para la fecha del pago o, por lo menos, para la ejecutoria de la sentencia definitiva, por lo que solicitan que se efectúe precisión en tales términos.

Finalmente, sostuvieron que en el fallo cuestionado se incurrió en varias vías de hecho: i) Fue desbordada la competencia en aquel instante en que se definió que el amparo se produjo por daños a bienes de terceros, cuando, en la apelación, la entidad aseguradora dijo que debía "(...) *respetarse los límites asegurados previstos en el numeral 2.3 (sic¹) de la Cláusula 3. (límite de **responsabilidad por muerte o lesiones a dos o más personas**).*"; 2) Fueron desconocidos los parámetros jurisprudenciales para el reconocimiento de daños morales, frente a su demostración y estimación; 3) No se detalló cada uno de los daños morales causados a las víctimas indirectas.

II. CONSIDERACIONES

Complementación

2.1. Es asunto averiguado que el canon 287 de la Codificación Procesal General, dispone que se deberá adicionar la sentencia que omitió resolver "(...) *sobre cualquiera de los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento (...)*". Dicho en otras palabras, el propósito es el de "(...) *lograr que una providencia inacabada o deficitaria se complete para alcanzar su plenitud, sin que ello comporte para los contendientes la posibilidad de combatir las consideraciones en que se finca la decisión.*"¹.

Respecto de esta figura, la Corte Suprema de Justicia ha dilucidado que,

"No se trata de disipar cualquier incertidumbre que pueda aquejar a una de las partes, ni complacerlas, en resolver aspectos que no fueron planteados en la pretensión o en las excepciones, o que por su escasa importancia no se consideran como verdaderos extremos del litigio, «Lo que la ley quiere y así lo exige es... que [se] haya omitido resolver sobre uno de los extremos de la relación jurídica debatida, o sobre costas, o sobre perjuicios en razón de temeridad o mala fe de las partes o sus apoderados (...).».

¹ Auto 5522-2022 de 15 de diciembre de 2022, rad. 05001-31-03-017-2008-00402-01.



Por esto, su aplicación resulta improcedente, al decir de la Sala, cuando busca «(...) tocarse lo ya resuelto o definido» , bajo cualquier pretexto, por ejemplo, la insuficiente motivación, a fin de obtener una decisión distinta a la esperada, pues si esa es la aspiración, como en otra ocasión se señaló, «(...) esto implica que hubo un pronunciamiento sobre el particular, con independencia de las razones que se hayan aducido para el efecto»^{2/3}.

2.2. En esa línea de pensamiento, se observa que no fue motivo de controversia ante esta instancia lo atinente a la estimación del daño emergente que hizo el Juez 17 Civil del Circuito de esta ciudad, pues los reparos de los demandantes se circunscribieron a atacar la condena impuesta a La Equidad Seguros Generales Organismo Cooperativo, para que se determinara su valor en pesos y sobre ésta se pudieran calcular los intereses moratorios; las eximentes de responsabilidad de la Cooperativa de Transportes Velotax Ltda; la graduación de la culpa conjunta de los agentes generadores del daño y la ausencia de prueba en la afectación moral irrogada a los accionantes; la exclusión pactada en el contrato de seguro por no haber cobertura en caso de muerte o lesiones a los ocupantes del vehículo asegurado; la declaratoria de la prescripción extintiva del contrato de seguro; la limitación de la condena al máximo valor asegurado y la participación de las partes en la ocurrencia del accidente de tránsito, sin que los demandados apelantes plantearan discusión alguna sobre el mismo aspecto.

Por consiguiente, el daño emergente como integrante de los perjuicios materiales cuya reparación se pretende, resultaba intocable en la decisión de segundo grado, en estricto acatamiento de lo normado en el artículo 320 del Código General del Proceso, precepto que prevé los límites del *Ad quem*, al momento de desatar la alzada.

Pese a lo anterior, el numeral tercero de la aludida decisión de manera expresa señaló; "**CONFIRMAR en lo restante la sentencia recurrida.**", siendo ello suficiente para entender que el pronunciamiento que se echa de menos, hace parte integral del fallo proferido en esta instancia, y que por tanto, el mismo conserva plena vigencia, resultando improcedente dar aplicación al artículo 287 del Código General del Proceso, por virtud de no

² CSJ AC, 27 de enero de 2006, expediente 25941.

³ Auto AC4055-2019 de 24 de septiembre de 2019, rad. 11001-02-03-000-2018-01735-00.



haberse omitido resolver sobre punto alguno que debiera ser objeto de pronunciamiento, empero, sí se estima procedente hacer uso de dicha facultad, igualmente reclamada por los actores, para actualizar el rubro determinado por concepto de daño emergente por el juzgado de conocimiento hasta la fecha de esta providencia, para cuyo efecto se liquidarán hasta esta data intereses del 6% anual, sobre la suma de \$2'000.000,00, por concepto de gastos funerarios sufragados por el señor Oscar David Betancur Ochoa, monto que por demás, deberá ser nuevamente actualizado para la fecha de su pago, tal como se indicó en la modificación que sobre el particular efectuó el juzgado a la sentencia primigenia en providencia del 9 de diciembre de 2021. Lo anterior, conformidad con lo normado en el inciso segundo del artículo 283 del estatuto adjetivo.

2.3. No ocurre lo propio, en lo que atañe con la condena impartida a la aseguradora Equidad Seguros Generales Organismo Cooperativo, que a criterio de los demandantes fue en abstracto, por virtud de que no se especificó en ella la cuantía de los intereses moratorios que aquélla debe pagar, pues revisados precedentes jurisprudenciales sobre el tema de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, dentro de ellos las sentencias STC8573 de 2020 y la SC 5681 de 2018, citadas en el fallo de que se trata, lo crucial en este tipo de contiendas es establecer el puntal a partir del cual deben reconocerse los intereses moratorios previstos en el artículo 1080 del Código de Comercio, sin que se exija que en el fallo que ordena su pago deban concretarse en una suma determinada, resultando suficiente con haber consagrado en el literal b) del numeral segundo de tal decisión, que sobre la suma de \$42'187.068,00, por concepto de valor asegurado, se reconocerán "*intereses moratorios desde el 13 de octubre de 2013 hasta cuando se produzca su pago*", lo cual, por demás, acata lo normado en el artículo 431 del Código General del Proceso, para efectos de la liquidación de dichos réditos para el momento de ser cobrados o pagados por la aseguradora condenada.

Así las cosas, se deduce fácilmente que no se presentó la abstracción o falencia enrostrada pues se indicó el monto sobre el cual se aplicarían los intereses reconocidos, así como el periodo de su causación, esto es, la



fecha de inicio y el momento final de su liquidación, por lo que no puede abrirse paso la solicitud de adición efectuada sobre esta materia.

Aclaración

2.4. De otra parte, el artículo 285 del Código General del Proceso establece que la *"sentencia no es revocable ni reformable por el juez que la pronunció"* y aunque ofrece la posibilidad de ser aclarada, de oficio o a solicitud de parte, dentro del término de ejecutoria de la providencia, lo cierto es que su viabilidad exige que la decisión contenga conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, *"siempre que estén contenidas en la parte resolutive de la sentencia o influyan en ella"*.

Ya lo ha reiterado la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, que lo pretendido con dicha herramienta es que sean remediadas, eventualmente, aquellas inconsistencias *"(...) que puedan presentarse en la fase ulterior a la expedición del fallo, derivadas de expresiones o frases que generen dubitación, [y] se presten para equívocos o se muestren ambiguas, siempre que hayan quedado consignadas en su parte resolutive o cuando aun estando en la considerativa, tengan influencia en aquella"*⁴.

De manera que lo exigido es la concurrencia de *"(...) una anfibología o duda seria, cierta, real y objetiva consignada en la resolución o motivación con incidencia en la decisión, esto es, parte de la hipótesis incontestable de frases, conceptos o expresiones incoherentes, ambiguos o carentes de claridad en torno a la inteligencia o sentido prístino de la decisión."*⁵.

2.5. No obstante, tal situación no acontece en el *sub examine*, en atención a que no existe expresión alguna que, en puridad de verdad, sea ambivalente, vaga o ininteligible en la parte motiva ni en la resolutive de la sentencia proferida por una Sala de Decisión de este Tribunal, cuyos integrantes, hay que decirlo, no son los mismos que emiten este pronunciamiento, pues como razón para efectuar la rebaja de dicho rubro,

⁴ Auto AC758-2020 de 5 de marzo de 2020, rad. 11001 02 03 000 2014-01006-00.

⁵ Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia de 10 de agosto de 2010, exp. 11001-3103-032-2001-00847-01



sólo se adujo que resultaba exorbitante la tasación en 750 SMLMV, a favor de todos los actores, efectuándose en el fallo una nueva valoración probatoria, para con sustento en la misma ajustar la condena de perjuicios morales *"de acuerdo con el arbitrio judicial ponderado que realizó esta Corporación"* (fl.23), para cada uno de los convocantes y frente a su relación con las víctimas directas del accidente de tránsito y los fatales agravios ocasionados a éstas.

Y es que la parte demandante propugna por la aclaración respecto de la distinción de los perjuicios morales irrogados a cada víctima por los daños corporales causados a las víctimas directas, los señores Félix Horacio Betancur Mesa y Belisa Ochoa Moreno, toda vez que, pregona, que las cargas impositivas se ordenaron de forma unificada, situación que les impide conocer cuáles perjuicios morales les fueron reconocidos por cada daño sufrido por dichas personas y cuáles no, aduciendo que dicha fórmula unificada contiene conceptos o frases que ofrecen verdadero motivo de duda, a la luz de lo normado en el artículo 285 del Código General del Proceso.

Al respecto, el numeral segundo de la decisión de primer grado fue modificado en esta instancia de la siguiente manera:

"a. Se reconocen como daños morales por la muerte de FÉLIX HORACIO BETANCUR MESA (qepd) y las secuelas físicas y mentales de BELISA OCHOA MORENO: (i) a favor de ADRIANA BETANCUR OCHOA la cifra de 80 smmlv para esta anualidad, es decir, \$80.000.000; (ii) a favor de ÓSCAR DAVID BETANCUR OCHOA el valor de 50 smmlv para esta anualidad, es decir, \$50.000.000; (iii) a favor de ISABELLA MEJÍA BETANCUR la suma de 10 smmlv para esta anualidad, es decir, \$10.000.000; (iv) a favor de GABRIEL FELIPE MEJÍA BETANCUR el monto de 5 smmlv para esta anualidad, es decir, \$5.000.000; (v) a favor de MARÍA ALEJANDRA BETANCUR SANJUÁN la cifra de 5 salarios smmlv para esta anualidad, es decir, \$5.000.000; y (vi) a favor de LAURA ANDREA BETANCUR SANJUÁN el valor de 5 smmlv para esta anualidad, es decir, \$5.000.000."

Ahora bien, a pesar de que es cierto que tales rubros fueron totalizados respecto a cada beneficiario en cuanto a los daños sufridos en conjunto por las víctimas directas, no puede perderse de vista que la decisión definitiva no puede ser revocada ni variada por el juez que la emitió, mucho menos si no se presenta ningún elemento de confusión u oscuridad, pues para el caso las cargas dinerarias impuestas a los demandados están plenamente determinadas y justificadas en la decisión,



tanto en la parte considerativa como en la resolutive, sin que ello ofrezca motivo de duda, amén de que lo pretendido por los actores entrañaría una modificación sobre el fondo de dicho pronunciamiento, lo cual no resulta de recibo a través del mecanismo de la aclaración.

2.6. En lo que concierne a que los daños morales se tasaron en salarios mínimos legales, cuyo equivalente fue indicado “para esta anualidad” se estima necesario precisar que los rubros reconocidos por dicho concepto en salarios mínimos tuvieron como hito temporal el año 2022, sin hacer referencia a la fecha del pago que es el momento en el que debe cuantificarse la obligación y, por supuesto, con el salario mínimo legal mensual vigente para ese instante, por lo que sobre este singular aspecto lo procedente es acudir a su aclaración – más no a su corrección como lo reclama el interesado-, bajo el entendido de que debe aceptarse que la forma como quedó redactado el respectivo literal sí ofrece duda al haberse concretado la condena de los perjuicios morales para el momento de la condena más no del pago, que es cuando debe efectuarse la liquidación de dicho rubro atendiendo su valor equivalente para la data en que ésta se elabore.

2.7. Así las cosas, se accederá parcialmente a la petición de complementación y aclaración del fallo respecto de lo anteriormente señalado, y las demás solicitudes de adición y aclaración serán denegadas.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, **administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, el Tribunal Superior de Bogotá D.C., Sala Quinta Civil de Decisión,**

RESUELVE



PRIMERO: Adicionar al numeral **SEGUNDO** de la sentencia proferida por esta Corporación el 13 de diciembre de 2022, el literal c), el cual quedará en los siguientes términos:

"Mantener el literal a) del numeral segundo del fallo apelado, con los acápites 1 y 2 emitidos en la sentencia de 29 de septiembre de 2021 y complementada el 9 de diciembre postrero, con la modificación en la condena por daño emergente a la fecha de esta sentencia complementaria, la cual quedará así: (...) por daño emergente reconocido a favor de OSCAR DAVID BETANCUR, corresponde a la fecha de esta sentencia complementaria la suma de tres millones trescientos sesenta mil pesos (\$3'360.000.00), suma que deberá ser cuantificada hasta su pago efectivo, liquidando intereses del 6% anual."

SEGUNDO: ACLARAR el literal b) del numeral **SEGUNDO** del referido fallo, en el sentido de indicar que los rubros reconocidos por concepto de perjuicios morales en favor de cada uno de los demandantes, serán tenidos en cuenta de acuerdo a la equivalencia del valor del salario mínimo legal mensual vigente para la fecha en que se efectúe el respectivo pago.

TERCERO: NEGAR las demás solicitudes de aclaración y adición presentadas por la parte demandante contra la providencia emitida por esta Corporación el pasado 13 de diciembre de 2022, de conformidad con las motivaciones que anteceden.

CUARTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sala Civil, dar cumplimiento a lo ordenado en el proveído de la misma fecha.

NOTIFÍQUESE

SANDRA CECILIA RODRÍGUEZ ESLAVA

Magistrada

ADRIANA SAAVEDRA LOZADA

Magistrada



LUIS ROBERTO SUAREZ GONZÁLEZ
Magistrado

Firmado Por:

Sandra Cecilia Rodríguez Eslava
Magistrada
Sala Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Luis Roberto Suarez Gonzalez
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional
Dirección Ejecutiva De Administración Judicial
División De Sistemas De Ingeniería
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Adriana Saavedra Lozada
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional
Sala 001 Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **7ae857078299360b2e055737d68151abfb2514c8c183409097dc8c7d194f6719**

Documento generado en 19/04/2023 06:36:40 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>